

Santiago, diez de junio de dos mil veintiuno.

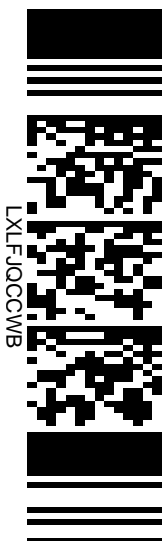
**Visto y teniendo presente:**

**Primero:** Que don Hernán Triviño Oyarzún, abogado, en representación de Televisión Nacional de Chile (TVN), de conformidad con el artículo 34 de la Ley N° 18.838, interpone recurso de apelación contra la resolución del H. Consejo Nacional de Televisión (CNTV) que impuso una multa de 20 unidades tributarias mensuales a TVN mediante el Ordinario N° 1265 de 18 de noviembre del año 2020, notificado el 3 de diciembre de 2020, con el objeto de que esa decisión se deje sin efecto o, en subsidio, la sustituya por amonestación, con costas.

Funda los hechos en que el CNTV formuló cargos a TVN por una supuesta infracción al artículo 1° de la Ley N° 18.838 al dificultar o entorpecer el acceso de la información comunicada a la población con discapacidad auditiva, pese a la evidente incompetencia de dicho organismo de acuerdo con las normas de la Ley N° 20.422; y luego le aplicó la multa.

Respecto al derecho aplicable, lo divide en tres capítulos. El primero, la incompetencia del CNTV para conocer del asunto.

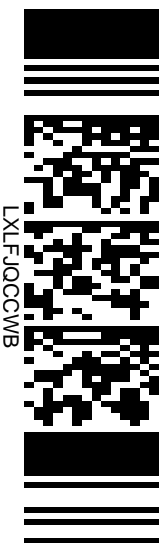
El Decreto 32 establece las normas para la aplicación de mecanismos de comunicación audiovisual para posibilitar el acceso a la programación televisiva de personas con discapacidad auditiva, reglamento referido en el artículo 25 de la Ley N° 20.422 que establece Normas Sobre Igualdad de Oportunidades e Inclusión Social de Personas con Discapacidad. El artículo 6° del Reglamento expresamente indica el organismo cuyo rol es la



fiscalización y cumplimiento del mismo decreto, y corresponde al Servicio Nacional de Discapacidad, de conformidad con lo establecido en el artículo 62 letra J) de la Ley N° 20.422, que le encomienda "...Velar por el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias relacionadas con la protección de los derechos de las personas con discapacidad. Esta facultad incluye la atribución de denunciar los posibles incumplimientos ante los organismos o instancias jurisdiccionales respectivas, y ejercer acciones y hacerse parte en aquellas causas en que estén afectados los intereses de las personas con discapacidad, de conformidad a la ley".

El propio Consejo Nacional de Televisión había señalado en la denuncia del caso 30291-Y4Y9P0 de 27 de enero de 2020: *"SEXTO: Que, como ha sostenido este Consejo en diversas oportunidades, en razón de lo dispuesto en el artículo 62 letra j) de la Ley N° 20.422, este órgano carece de las competencias legales para conocer de la materia objeto de la presente denuncia, recayendo esta responsabilidad en el Servicio Nacional de la Discapacidad, quien podrá impetrar las acciones que estime pertinentes ante el Juzgado de Policía Local, conforme lo dispone el artículo 57 de la referida ley; ante el Juzgado de Policía Local, conforme lo dispone el artículo 57 de la referida ley;"*. Añade el recurrente que el mismo razonamiento histórico se encuentra en las sesiones de fecha 04 de diciembre (punto 7), 11 de diciembre (punto 5) y 18 de diciembre (puntos 7 y 8), todas de 2017.

El segundo punto de derecho es la malinterpretación del artículo 12 letra b) de la Ley N° 18.838, que en el inciso 4° señala que "El Consejo Nacional de Televisión deberá siempre velar por el



cumplimiento de la ley N° 20.422 y su reglamento. En el caso que se emitan programas de acuerdo con el párrafo primero de esta letra b) los concesionarios y permisionarios deberán siempre incluir el correspondiente subtítulo oculto para ser visualizado especialmente por personas con discapacidad auditiva”.

Ahora bien, de conformidad con el artículo 37 bis de la Ley N° 19.880 de Bases de Procedimientos Administrativos, “Cuando un órgano de la Administración del Estado deba evacuar un acto administrativo de carácter general que tenga claros efectos en los ámbitos de competencia de otro órgano, le remitirá todos los antecedentes y requerirá de éste un informe para efectos de evitar o precaver conflictos de normas, con el objeto de resguardar la coordinación, cooperación y colaboración entre los órganos involucrados en su dictación”.

Por lo que concluye el recurrente que, conforme Ley N° 19.880, la función del Consejo Nacional de Televisión nunca fue fiscalizar y sancionar, toda vez que no es el organismo técnico especializado en materia de discapacidad.

Como tercer punto de derecho, argumenta que las supuestas transgresiones a la Ley N° 20.422 mediante el procedimiento de la Ley N° 18.838 provoca la invalidez del acto administrativo. El Consejo Nacional de Televisión debió haber informado al Servicio Nacional de Discapacidad sobre los hechos, según el artículo 12 letra b) de la Ley N° 18.838 y el artículo 37 bis de la Ley N° 19.880. Hay una omisión de un trámite obligatorio en el actual procedimiento administrativo.

En subsidio de todo lo anterior, indica que el origen del

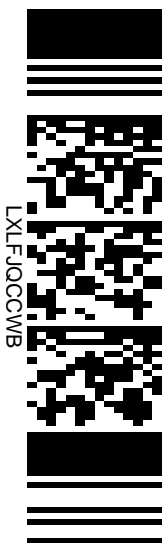


posible incumplimiento proviene de una posición incorrecta del interprete el que fue localizado en una parte muy inferior de la pantalla por parte de la transmisión del Gobierno de Chile. De esta manera se hace necesario realizar un análisis jurisdiccional de la falta de discrecionalidad administrativa del Consejo Nacional de Televisión en este tipo de casos, lo que posee una íntima relación con el principio de juridicidad que impetra en la actividad administrativa.

La facultad discrecional se interpreta de forma errónea, especialmente por el CNTV, cayendo a una excesiva utilización de sus facultades sancionatorias, distorsionando el sentido de la legalidad, de su reglamento y el mandato para el cual se concibió, pese a que aplicó la sanción en el mínimo legal en cuanto al monto, pero parte en una amonestación.

**Segundo:** Que doña María Carolina Cuevas Merino, Presidenta del Consejo Nacional de Televisión, en representación del Consejo Nacional de Televisión, pide que sea rechazada la reclamación con costas.

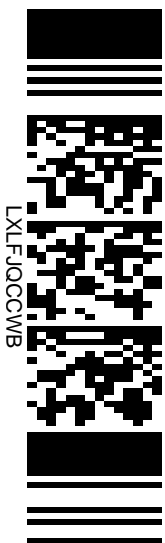
Indica que se sancionó a TVN por la infracción al correcto funcionamiento de los servicios de televisión, según lo dispuesto por el artículo 19 N° 12 de la Constitución Política de Chile, en relación con los artículos 1°, 12 letra a), 33 y demás pertinentes de la Ley N° 18.838, lo que se configuró por la exhibición de un despacho en directo del Ministerio de Salud y un mensaje de su Excelencia el Presidente de la República, efectuado el 18 de marzo de 2020 con ocasión de la pandemia de COVID-19 que afecta al país, durante el cual se vulneraron los derechos fundamentales de



la población en situación de discapacidad auditiva, precisamente cuando el Presidente de la República informaba a todo el país que, debido a la pandemia, había tomado la decisión de Decretar el Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe, que permite al gobierno adoptar una serie de medidas, entre ellas algunas que involucran la restricción en el ejercicio de derechos fundamentales como la libertad de desplazamiento y de reunión.

Ambas transmisiones contaron con la inserción proveída en origen de un recuadro con intérprete de señas ubicado en la parte inferior derecha de la pantalla. En ambas ocasiones, la concesionaria deliberadamente cubrió estos recuadros con faldones sobre los que colocó un Generador de Caracteres (GC), que por momentos impidió o hizo muy difícil para la población con discapacidad auditiva poder seguir los gestos que realizaba la intérprete; situación que conculcó o perturbó el ejercicio de su derecho a la información, así como el derecho de igualdad y no discriminación.

El fundamento del reproche se asentó en que la concesionaria habría incurrido en una conducta contraria al correcto funcionamiento de los servicios de televisión, en tanto existe prohibición en nuestra legislación de que los servicios de televisión vulneren la dignidad y los derechos fundamentales de las personas, particularmente cuando ello puede involucrar una merma en su calidad de vida y en las condiciones necesarias para su pleno desarrollo. Conducta que resulta particularmente grave cuando los afectados son personas que, por su condición, requieren de la sociedad medidas especiales para salvaguardar el pleno ejercicio y goce de sus derechos, en un plano de igualdad

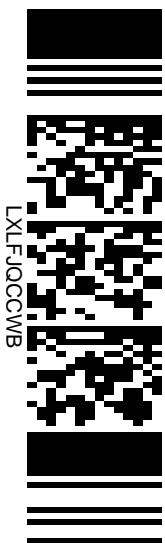


con el resto de la ciudadanía.

El Consejo fundó su sanción en el hecho de que la concesionaria deliberadamente entorpeciera el acceso a la traductora de señas proveída por el Gobierno para garantizar el derecho fundamental a la información de las personas con discapacidad auditiva, y no en el incumplimiento de la obligación de hacer que deriva de lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley N° 20.422.

En sus descargos, TVN no contravirtió los fundamentos de hecho de la sanción, en tanto no negó que el día 18 de marzo de 2020, al exhibir dos enlaces en directo desde el Palacio de la Moneda, deliberadamente había entorpecido el derecho a la información de la población con discapacidad auditiva al colocar, por sobre el recuadro con la intérprete de señas, un Generador de Caracteres que impedía ver los gestos de la intérprete; por lo que incurrió en una conducta contraria al correcto funcionamiento de los servicios de televisión, que contempla el artículo 1° de la Ley N° 18.838. Y, para ponderar el monto de la sanción el Consejo tuvo en consideración: la gravedad de la infracción, el bien jurídico vulnerado, el alcance nacional de la concesionaria y el hecho de que fuera reincidente en la infracción, presentando en los 12 meses anteriores a la conducta reprochada 08 sanciones por infringir el artículo 1° de la Ley N° 18.838. Y se le aplicó la multa más baja que permite el artículo 33 de la citada ley, equivalente a apenas el 1% del máximo posible, lo que debe considerarse proporcionada a la conducta que se reprocha.

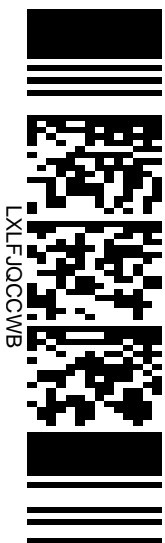
La concesionaria TVN intervino deliberadamente la emisión,



ocultando parcialmente el recuadro con lenguaje de señas que había sido insertado en la transmisión oficial, lo que entorpeció el libre acceso a la información de las personas con discapacidad auditiva; situación que configura una vulneración al derecho fundamental a la información y a la igualdad y no discriminación de este sector de la población; derechos garantizados en la Constitución y en tratados internacionales suscritos por Chile, por lo que se configura una infracción al correcto funcionamiento de los servicios de televisión.

Indica que son variadas las disposiciones de fuente internacional suscritas por Chile que reconocen en conjunto con el derecho a informar, el derecho a la información (derecho a obtener información o derecho a ser informado) como un derecho fundamental. Así, lo dispuesto en el artículo 19.2 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos; el artículo 13.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

En el ámbito interno, si bien el artículo 19 N° 12 de la Constitución Política de la República no consagra explícitamente el derecho a la información como derecho fundamental, tanto la doctrina como la jurisprudencia del Tribunal Constitucional están contestes en reconocer que el derecho a ser informado se debe entender implícitamente contenido en la referida garantía. Interpretación que se ve refrendada por lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley N° 19.733 que, al regular el ejercicio de la libertad de opinión e información y el ejercicio del periodismo, dispone que “Se reconoce a las personas el derecho a ser informadas sobre los hechos de interés general”.



La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (en adelante la Convención), promulgada en Chile mediante Decreto N° 201 del Ministerio de Relaciones Exteriores, que fue publicado en el Diario Oficial de 17 de septiembre de 2008, reconoce en el libre e igualitario acceso a la información y a las comunicaciones, una condición esencial “para que las personas con discapacidad puedan gozar plenamente de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales”. Y su artículo 21 obliga a los estados parte a que adopten todas las medidas de inclusión que sean necesarias para que las personas con discapacidad puedan ejercer el derecho a la libertad de expresión y opinión, incluida la libertad de recabar, recibir y facilitar información e ideas, en igualdad de condiciones con el resto de la población, evitando toda forma de discriminación arbitraria.

A fin de materializar en el orden interno las obligaciones internacionales adquiridas por Chile al suscribir la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, se promulgó la Ley N° 20.422 cuyo objetivo es “asegurar el derecho a la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, con el fin de obtener su plena inclusión social, asegurando el disfrute de sus derechos y eliminando cualquier forma de discriminación fundada en la discapacidad”. Esta Ley estableció una serie de obligaciones de hacer para los servicios de televisión, a fin de que adopten medidas inclusivas dirigidas a la población con discapacidad auditiva. En particular, el inciso 2° del artículo 25 se estableció la obligación de incluir lenguaje de señas y subtítulo al transmitir información



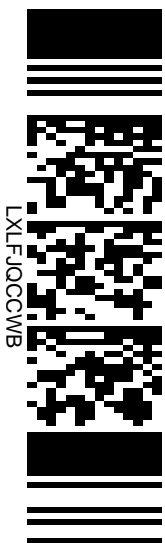


relacionada con aspectos relevantes del acontecer nacional, entre los que se encuentran las cadenas nacionales y los bloques noticiosos transmitidos por situaciones de emergencia o calamidad pública.

Precisa el informante que la conducta que se ha cuestionado en este procedimiento a la concesionaria no es el incumplimiento de la obligación que fluye de lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley N° 20.422 (en tanto no era necesario que incluyera a la intérprete de señas, ya que esta ya venía inserta en la emisión de origen que la concesionaria se limitó a retransmitir), sino el trato irrespetuoso e indolente que propina a la población con discapacidad auditiva, en tanto, voluntariamente, y sin haber justificación, cubre el recuadro con la intérprete de señas, entorpeciendo de esta manera el derecho de las personas con discapacidad auditiva de acceder a la información que proporcionaba el Gobierno en condiciones dignas.

Así, la conducta de TVN, en cuanto lesiona el derecho fundamental a la información de las personas con discapacidad, así como sus derechos de igualdad y no discriminación, configura una infracción al correcto funcionamiento de los servicios de televisión según el artículo 1° de la Ley N° 18.838, al definir el correcto funcionamiento de los servicios de televisión.

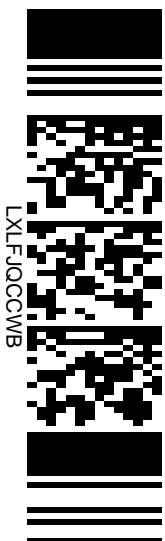
Así, en lo que a este caso aplica, constituirá infracción a la Ley N° 18.838 toda transmisión de registros audiovisuales que atenten contra el principio constitucional del correcto funcionamiento de los servicios televisivos, mediante la vulneración de la dignidad de las personas, y/o de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales



ratificados por Chile y que se encuentren vigentes; así como la omisión del deber de incorporar facilidades de acceso a las transmisiones para personas con necesidades físicas especiales. Corresponde al Consejo Nacional de Televisión, por mandato legal, a través de un proceso de análisis racional y fundado, determinar si la transmisión de dichos registros constituye o no una infracción a la normativa vigente.

Es este deber de abstención de no bloquear el recuadro del lenguaje de señas el que la concesionaria incumple durante la emisión fiscalizada, por cuanto, en lugar de permitir que las personas con discapacidad auditiva puedan acceder directamente a la importante información que estaba entregando el Gobierno, lo que hace es cubrir deliberadamente el recuadro con la intérprete de señas, de modo que, por algunos pasajes, impide por completo o dificulta gravemente que la personas con discapacidad puedan acceder a la información que se está comunicando.

En otro orden de ideas, el CNTV indica que en su reclamación la concesionaria no derriba la presunción de legalidad del acto administrativo de sanción dictado. Como ha señalado reiteradamente la Excma. Corte Suprema, y ha confirmado la Ilma. Corte de Apelaciones de Santiago, aun cuando el artículo 34 de la Ley N° 18.838 utiliza el vocablo “apelación” para denominar este recurso, lo cierto es que su naturaleza jurídica es la de un recurso especial de reclamación de legalidad, por lo que el ejercicio de las competencias de la Corte de Apelaciones en su conocimiento y resolución, se deben ajustar a las particularidades de esta clase de procedimientos.



En todo caso, y sin perjuicio de lo señalado supra, la sanción que se le impuso a la concesionaria, atendida la gravedad y circunstancias del hecho que se le imputa, sería plenamente proporcionada y apegada a derecho, conforme ya se ha señalado.

**Tercero:** Que de lo señalado en los considerandos anteriores se desprende que el tema básico que se debe resolver, primeramente, es la naturaleza del recurso de autos, apelación o reclamación de ilegalidad.

Por lo cierto es que no puede ser considerado como un recurso de apelación, ya que conforme el artículo 186 del Código de Procedimiento Civil, ese arbitrio procesal “tiene por objeto obtener del tribunal superior respectivo que enmiende, con arreglo a derecho, la resolución del inferior”, siendo que de ninguna manera puede llegar a entenderse que esta Corte es, de alguna manera, superior jerárquico del reclamante.

La competencia entregada por la Ley a este tribunal lo es para el ejercicio de la potestad con que cuenta para revisar la legalidad de los actos administrativos en virtud del principio de impugnabilidad que consagra el artículo 15 de la Ley N° 19.880.

Esto ya ha sido resuelto por la Excma. Corte Suprema, tal como se desprende de las sentencias indicadas por el mismo recurrente, de 30 de noviembre de 2020 y 04 de enero de 2021, por medio de las cuales se acogieron cuatro recursos de queja presentados por el CNTV (69.774-2020, 69.781-2020, 71.917-2020 y 71.977-2020), en que el Máximo Tribunal señaló:

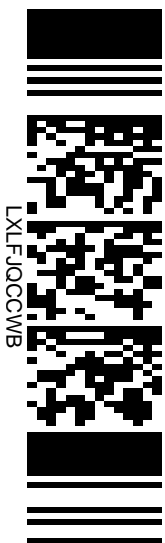
*“SEXTO: [...] como lo ha sostenido reiteradamente esta*



*Corte, (SCS Rol 6.750-2012, 47.898-2016, 100.726-2016, 15.369-2018, 30.515-2020, 69.774-2020 y 71.917-2020, entre otras), el artículo 34 de la Ley N° 18.838, en cuyo mérito la permisionaria compareció ante la Corte de Apelaciones dando origen a este proceso, denomina apelación al reclamo de ilegalidad jurisdiccional que consagra en contra de las resoluciones que se pronuncian respecto de las reclamaciones administrativas deducidas en los procedimientos que los respectivos textos legales establecen. Así, y dado que la competencia del tribunal viene dada por la naturaleza del recurso de reclamación, en tanto control de legalidad, para modificar la resolución dictada por la autoridad reguladora competente es necesario “dar por establecida la ilegalidad, invalidar el acto administrativo y disponer la decisión adecuada al caso, si procediere, conforme a los límites de su competencia en un reclamo de ilegalidad” (SCS Rol N° 21.814-2017).*

*“SÉPTIMO: Que en las condiciones expuestas resultaba improcedente para los recurridos, una vez establecida la legalidad de la infracción y de la aplicación de la multa, disponer la rebaja de su cuantía, toda vez que la competencia de la Corte en esta materia se vincula con la determinación de la legalidad o ilegalidad del acto administrativo que impone la sanción. En consecuencia, si los sentenciadores consideran que la resolución que aplica la sanción es legal, carecen de atribuciones para proceder a su disminución.*

*“OCTAVO: Que las consideraciones expuestas por los magistrados recurridos contienen un error, en tanto entienden que el reclamo en estudio corresponde a un recurso de apelación,*

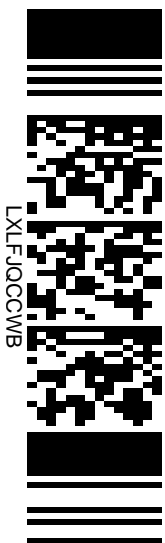


*atendiendo para ello únicamente al nomen iuris y no a la naturaleza de la acción, como se ha explicado en los razonamientos que preceden, producto de lo cual efectuaron una nueva valoración de la prueba rendida, labor en la que, no obstante, no invocaron vicios relativos a la legalidad de la resolución impugnada, proceder que, sin embargo, no guarda relación con la competencia que la ley entrega al tribunal para resolver el arbitrio intentado.*

*“NOVENO: Que, por consiguiente, al no haber aplicado los jueces recurridos correctamente las normas que regulan la situación en examen y, en particular, la sanción consagrada por el legislador para la infracción cuyo acaecimiento se acreditó, forzoso es concluir que han incurrido en falta o abuso el cual ha resultado lesivo para los intereses del Consejo Nacional de Televisión, cuya transgresión debe ser enmendada con el remedio jurisdiccional que se adopta por esta vía”.*

También esta misma Corte ha sostenido y mantenido esta tesis, por ejemplo, en los ingresos 333-2020 y 374-2020, por lo que, sobre el particular, no existe discusión de que lo sometido a conocimiento y decisión es un Recurso de Reclamación de Ilegalidad para discutir si la sanción fue establecida conforme a derecho o no.

**Cuarto:** Que toda la argumentación de la reclamante para fundar la ilegalidad la hace consistir en la incompetencia del CNTV para aplicar una multa por infracción a la Ley N° 20.422, siendo que por ley no estaba facultado para ello, debiendo haber puesto en conocimiento de Servicio Nacional de Discapacidad la anomalía

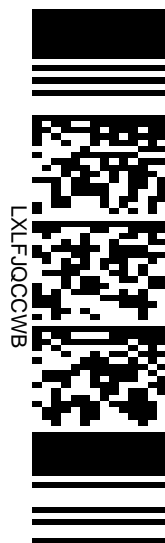


detectada, y esta entidad tenía la facultad legal para accionar ante el Juzgado de Policía Local respectivo.

**Quinto:** Que, para tener una debida decisión sobre el punto, es necesario analizar detalladamente los fundamentos de la resolución recurrida.

Así, ya en la materia de que se trata el oficio sancionatorio, éste indica con precisión que se le está aplicando una sanción a TVN por infringir el correcto funcionamiento de los servicios de televisión, por haber incorporado elementos de edición que dificultaron el acceso de la población con discapacidad auditiva a la información. Esto es, hace referencia explícita y detallada a las competencias y obligaciones que le son inherentes al CNTV de conformidad con el artículo 1° de la Ley N° 18.838, y no se refiere a alguna de las obligaciones de hacer que el recurrente tiene con ocasión del cumplimiento de la Ley N° 20.422.

Luego, se hace referencia a lo dispuesto en el Título V de la Ley N° 18.838, esto es, de las sanciones. Al Informe de Caso C-8780, elaborado por el Departamento de Fiscalización y Supervisión del CNTV, así como el respectivo material audiovisual, que se han tenido a la vista. A la sesión del día 22 de junio de 2020, en se acordó formular cargo a la recurrente, por la emisión de elementos de edición que habrían dificultado el acceso de la población con discapacidad auditiva a la información, pudiendo lo anterior constituir una infracción de dicha concesionaria a su deber de funcionar correctamente. Los cargos fueron notificados mediante oficio CNTV N° 781, de 13 de julio de 2020, y que la concesionaria, representada por don Hernán Triviño Oyarzún,

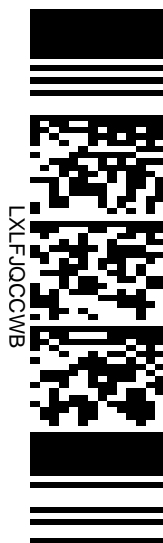


presentó bajo el ingreso número 1446/2020 -luego complementado mediante ingreso 1459/2020- sus descargos, formulando una única alegación que dice relación con la incompetencia del Consejo para conocer del presente asunto, por cuanto el artículo 57 de la Ley N° 20.422, establece la existencia de un procedimiento especial de lato conocimiento en donde el Juez de Policía Local es el competente para conocer la materia de autos.

De este análisis se desprende que los cargos efectuados a TVN fueron por haber realizado un acto propio que obstaculizó el cumplimiento de la obligación de hacer que pesaba sobre el emisor de la información. No se le está atribuyendo responsabilidad por no haber realizado algo que le competía hacer para cumplir con la Ley N° 20.422.

Posteriormente, en la fundamentación y análisis del porqué se le aplicó la sanción impugnada – considerandos primero a decimosegundo-, la resolución recurrida es rica en detalles y precisiones de hecho y de derecho, que llevan a desestimar la hipótesis planteada por el impugnante, esto es, que la multa se le aplicó por incumplir una obligación de hacer, propia de la Ley N° 20.422; y no por una infracción directa de TVN a la Ley N° 18.838, por lo que, era en un procedimiento en el Juzgado de Policía Local respectivo que este tema debió ser resuelto.

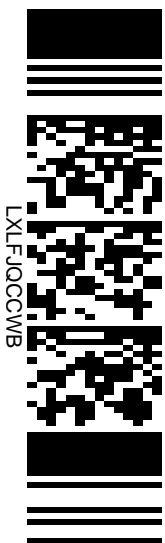
El 18 de marzo de 2020, por medio de la señal oficial del Gobierno, se informaba del estado de avance del COVID-19 en el país y, minutos más tarde, el Sr. Presidente de la República informaba de la declaración de Estado de Excepción Constitucional. Estas emisiones ya contenían un recuadro con una



persona realizando el lenguaje de señas para aquellas personas con discapacidad auditiva.

La recurrente procedió a “colgarse” de la señal oficial, quedando en ambas ocasiones, el referido recuadro para el lenguaje de señas obstaculizado por información propia que generaba TVN.

El Gobierno – al emitir la señal con el recuadro-, estaba dando cumplimiento a sus obligaciones internacionales – artículo 19.2 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos; artículo 13.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; artículo 21 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad- y nacionales contraídas – artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República- y, especialmente, en el artículo 25 de Ley N° 20.422 que establece la obligación de los concesionarios de servicios de radiodifusión televisiva de libre recepción y de los permisionarios de servicios limitados de televisión, de aplicar mecanismos de comunicación audiovisual que posibiliten a las personas en situación de discapacidad auditiva el acceso a su programación en los casos que corresponda, según lo determine el reglamento que al efecto se dictara a través de los Ministerios de Desarrollo Social, de Transportes y Telecomunicaciones y Secretaría General de Gobierno. Y, tratándose de bloques noticiosos transmitidos por situaciones de emergencia o calamidad pública que se difundan a través de medios televisivos o audiovisuales, éstos deberán ser transmitidos o emitidos subtítulos y en lengua de señas, en las formas, modalidades y condiciones que establezca el reglamento antes aludido.





De esta forma queda claro que no le correspondía a TVN – en este caso concreto- la obligación de hacer, ya que la estaba cumpliendo el Gobierno por medio de su señal oficial. Lo que le correspondía, y no realizó, era no obstaculizarla o desnaturalizarla, como ocurrió.

El inciso 6° del N° 12 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, y el artículo 1° de la Ley N° 18.838, establecen que el Consejo Nacional de Televisión será el encargado de velar por el correcto funcionamiento de todos los servicios de televisión que operen en el territorio nacional. Y es en el uso de esta facultad, y por el incumplimiento del correcto funcionamiento de la emisión al aire de la señal oficial, por parte de TVN, se le aplicó la sanción. No era el recurrente el obligado a contar con el intérprete de lenguaje de señas; ya que lo era quien estaba emitiendo la información – el Gobierno, en este caso.

La obligación que pesaba al recurrente era no obstaculizar tal recuadro, aspecto que no es propio de la Ley N° 20.422, y, en consecuencia, no podía ser conocido ante un Juzgado de Policía Local.

El concepto de “correcto funcionamiento” señalado en el artículo 1° de la Ley N° 18.838, comprende, en lo que dice relación con este caso, el pluralismo; la dignidad humana; la igualdad de derechos y trato entre hombres y mujeres; todos los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.

Y, expresamente indica inciso 8° del mismo artículo, que se puede considerar como correcto funcionamiento la incorporación



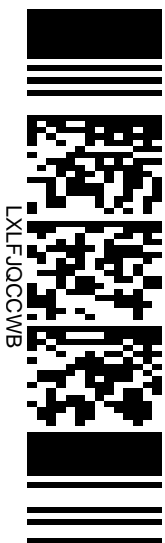
de facilidades de acceso a las transmisiones para personas con necesidades físicas especiales.

O sea, no cabe duda alguna que la sanción aplicada, al haber obstaculizado TVN el referido recuadro, está dentro de las competencias específicas y propias que la misma ley, de manera expresa, le encomienda al CNTV velar y resguardar.

A mayor abundamiento, y sin perjuicio del procedimiento propio que se establece en la Ley N° 20.422, ante el Juzgado de Policía Local, el artículo 12, letra b), inciso 4°, dispone el deber del CNTV de velar por el cumplimiento de esta Ley y de su Reglamento.

En consecuencia, es prístino que, aparte del procedimiento ante el Juzgado de Policía Local, por aquellos hechos no comprendidos en esta competencia, sí le corresponde al CNTV, por expresa disposición legal, velar por su cumplimiento y sancionarlos, como es el caso de marras.

Y, por la naturaleza y trascendencia de lo comunicado por medio de la señal del Gobierno, es evidente que se trata de aquellos casos en que se debe incorporar un intérprete de lenguaje de señas, para garantizar el acceso a la información de la población con discapacidad auditiva. Al haber entorpecido TVN el acceso al intérprete de lengua de señas ya incorporado en la transmisión oficial, agregando un generador de caracteres sobre el recuadro donde figuraba el intérprete, ello importa una contravención a su deber de funcionar correctamente en los términos del artículo 1° incisos 4° y 8° de la Ley N° 18.838, al dificultar y entorpecer el acceso de la información comunicada a la



población con discapacidad auditiva.

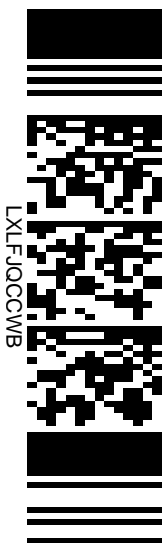
Por todo lo anteriormente razonado, el recurrido sí es competente para conocer y sancionar el mal funcionamiento detectado. Por lo demás, cabe dejar sentado que la reclamante no cuestiona los fundamentos de hecho de la sanción.

**Sexto:** Que, por los mismos argumentos y fundamentos se deben desestimar las alegaciones una mala interpretación del artículo 12 letra b) de la Ley N° 18.838, así como del artículo 37 bis de la Ley N° 19.880, ya que no se sobreponen las facultades y competencias; ni se incurre en un *non bis in ídem*, como se ha visto.

**Séptimo:** Que, al haberse establecido la competencia del reclamado para actuar conforme lo hizo, basta un análisis detenido del reclamo de ilegalidad y una ponderación de los antecedentes reunidos en autos para, finalmente, subsumir los hechos denunciados en las normas jurídicas aplicables.

Al revisar los elementos fácticos que enmarcan el presente reclamo, se aprecia que nada ilegal ha sucedido durante toda la tramitación de estos antecedentes que culminaron con la multa impuesta. El proceso administrativo se desarrolló dentro del ámbito de la competencia de la autoridad reclamada y que en este se observa el principio del debido proceso administrativo en un orden consecutivo legal donde la reclamante tuvo la posibilidad de ejercer sus derechos.

**Octavo:** Que, si bien basta lo anterior para rechazar el reclamo, esta Corte igualmente se hará cargo de la alegación



subsidiaria, de la falta de proporcionalidad de la multa impuesta, pese a que, por ser un reclamo de ilegalidad, es improcedente entrar a modificar este punto.

Pero analizados los antecedentes, la gravedad de ellos, el alcance nacional de la infracción, la existencia de reincidencia, lo que da cuenta detenidamente el considerando decimotercero de la resolución recurrida, y que se aplicó el mínimo de la sanción pecuniaria, no cabe más que estimar que ese reproche tampoco es efectivo.

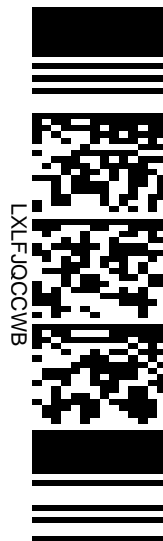
Atendido dispuesto en el artículo 19.2 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos; artículo 13.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; artículo 21 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad; artículo 19 N° 2 y 12 de la Constitución Política de la República; artículos 1°, 12, 33 y 38 de la Ley N° 18.838; artículos 12 y 25 de la Ley N° 20.422, **SE RECHAZA**, sin costas, la reclamación interpuesta por don Hernán Triviño Oyarzún, abogado, en representación de Televisión Nacional de Chile, en contra del Ordinario N° 1265 de 18 de noviembre 2020 del Consejo Nacional de Televisión.

Redacción del ministro (S) Sr. Pérez.

No firma el Ministro (i) señor Marinello, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y del acuerdo, por haber cesado funciones en esta Corte.

**Regístrese y archívese**

Rol N° 769-2020





Pronunciado por la Novena Sala de la C.A. de Santiago integrada por Ministro Inelie Duran M. y Ministro Suplente Jose S. Perez A. Santiago, diez de junio de dos mil veintiuno.

En Santiago, a diez de junio de dos mil veintiuno, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en <http://verificadoc.pjud.cl> o en la tramitación de la causa.  
A contar del 04 de abril de 2021, la hora visualizada corresponde al horario de invierno establecido en Chile Continental. Para la Región de Magallanes y la Antártica Chilena sumar una hora, mientras que para Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar dos horas. Para más información consulte <http://www.horaoficial.cl>